Tabla de contenido

[A N T E C E D E N T E S 2](#_Toc196919013)

[I. Presentación de la solicitud de información 2](#_Toc196919014)

[II. Prórroga 3](#_Toc196919015)

[III. Respuesta del Sujeto Obligado 3](#_Toc196919016)

[IV. Interposición del Recurso de Revisión 4](#_Toc196919017)

[V. Trámite del Recurso de Revisión ante este Instituto 4](#_Toc196919018)

[C O N S I D E R A N D O S 6](#_Toc196919019)

[PRIMERO. Competencia 6](#_Toc196919020)

[SEGUNDO. Causales de improcedencia y sobreseimiento 6](#_Toc196919021)

[TERCERO. Determinación de la Controversia 7](#_Toc196919022)

[CUARTO. Marco normativo aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública 9](#_Toc196919023)

[QUINTO. Estudio de Fondo 10](#_Toc196919024)

[SEXTO. Decisión 35](#_Toc196919025)

[R E S U E L V E 36](#_Toc196919026)

Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, de fecha treinta de abril de dos mil veinticinco.

**VISTO** el expediente conformado con motivo del Recurso de Revisión **02771/INFOEM/IP/RR/2025**, interpuesto por la persona Recurrente o Particular, en contra de la respuesta del Sujeto Obligado, **Ayuntamiento de San Martín de las Pirámides**, se emite la presente Resolución, con base en los antecedentes y considerandos que se exponen a continuación:

# A N T E C E D E N T E S

## I. Presentación de la solicitud de información

Con fecha diecisiete de enero de dos mil veinticinco, la parte Solicitante presentó una solicitud de acceso a la información pública, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, en lo sucesivo el SAIMEX, ante el **Ayuntamiento de San Martín de las Pirámides**, en la que requirió lo siguiente:

**Folio de la solicitud: 00005/MARTIPIR/IP/2025**

**DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA**

*“Requiero el CFDI de todos y cada uno de los integrantes del cabildo, de todos y cada uno de los directores y coordinadores de la administración 2025-2027, lo anterior de la primer quincena de enero. Solicito el documento que compruebe la certificación para ocupar los puestos de director que marca la Ley Organica. Solicito saber si la Sindico Municipal tiene parentezco familiar con algún integrante de la administración. Solicito el CV. del Coordinador de Reglamentos y Vía Pública.” (Sic).*

**MODALIDAD DE ENTREGA** *“A través del SAIMEX.”*

## II. Prórroga

Con fecha diez de febrero de dos mil veinticinco, el Sujeto Obligado, a través del SAIMEX y mediante el Responsable de la Unidad de Transparencia, informó que se aceptó una prórroga para ampliar el plazo para dar respuesta, sin embargo, no informó si fue autorizada por su   
Comité de Transparencia, ni remitió el acta correspondiente, por lo que, se le **insta para que en futuras ocasiones remita el acta en el que el Comité de Transparencia en el que se aprobó la prórroga para dar respuesta en términos de lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.**

## III. Respuesta del Sujeto Obligado

El dieciocho de febrero de dos mil veinticinco, el Sujeto Obligado a través de SAIMEX, dio respuesta en los siguientes términos:

* Oficio suscrito por el Encargado del Despacho de Recursos Humanos, en el que informó:
  + Respecto a las certificaciones para ocupar el puesto de director, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32, fracción IV de la Ley Orgánica Municipal, dicho requisito debe acreditarse dentro de los seis meses, y que, por ello, “*dicha certificación continua en trámite”*
  + Que, con relación a la información sobre la Síndico Municipal, es información que se desconoce puesto que no cuentan con las relaciones familiares que tiene el personal que trabaja en la administración.
* Síntesis curricular de un servidor público (Mario González Alva)

## IV. Interposición del Recurso de Revisión

Con fecha once de marzo de dos mil veinticinco, se recibió en este Instituto, a través del SAIMEX, el Recurso de Revisión interpuesto por la persona Recurrente, en los siguientes términos:

**ACTO IMPUGNADO**

*“la respuesta es incomprensible” (Sic).*

**RAZONES O MOTIVOS DE LA INCONFORMIDAD**

*“información incompleta, solo demuestra la falta de compromiso con la ciudadanía y las trabas que tiene el gobierno que a estas alturas esta aprendiendo. Fracasados.” (Sic).*

## V. Trámite del Recurso de Revisión ante este Instituto

**a) Turno del Medio de Impugnación.** El once de marzo de dos mil veinticinco, el SAIMEX, asignó el número de expediente **02771/INFOEM/IP/RR/2025,** al medio de impugnación que nos ocupan, con base en el sistema aprobado por el Pleno de este Órgano Garante y se turnó al Comisionado Ponente Luis Gustavo Parra Noriega, para los efectos del artículo 185, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**b) Admisión del Recurso de Revisión.** El catorce de marzo de dos mil veinticinco, se acordó la admisión del Recurso de Revisión interpuesto por la persona Recurrente en contra del Sujeto Obligado, en términos del artículo 185, fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el cual fue notificada a las partes en la misma fecha, a través del SAIMEX, en el que se les otorgó un plazo de siete días hábiles posteriores a la misma, para que manifestara lo que a su derecho conviniera y formularan alegatos.

**c) Informe Justificado y manifestaciones de la parte Recurrente.** De las constancias que obran en el expediente digital en SAIMEX, se aprecia que el Sujeto Obligado fue omiso en rendir informe justificado y la parte Recurrente no añadió manifestaciones.

**d) Cierre de instrucción.** El veintiuno de abril de dos mil veinticinco, al no existir diligencias pendientes por desahogar, se emitió el acuerdo por medio del cual se declaró cerrada la instrucción y se determinó pasar los expedientes a resolución, en términos de lo dispuesto en los artículos 185, fracciones VI y VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, acto que fue notificado a las partes en la misma fecha, mediante el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX).

Debido a que fue debidamente sustanciado e integrado el expediente electrónico y no existir diligencia pendiente de desahogo, se emite la resolución que conforme a Derecho proceda, de acuerdo con los siguientes:

# C O N S I D E R A N D O S

## PRIMERO. Competencia

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por la persona recurrente, conforme a lo dispuesto en los artículos 5°, párrafos trigésimos séptimos, trigésimo octavo y trigésimo noveno, fracciones I, II, III, IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1°, 2°, fracciones II y IV; 13, 29. 36, fracciones I y II; 176, 178, 179, 181 párrafo tercero, 185, 188 y 189 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios: 7°, 9°, fracciones I y XXIII y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

## SEGUNDO. Causales de improcedencia y sobreseimiento

De las constancias que forman parte del Recurso de Revisión que se analiza, se advierte que previo al estudio del fondo de la *litis*, es necesario estudiar las causales de improcedencia y sobreseimiento que se adviertan, para determinar lo que en Derecho proceda.

**Causales de improcedencia**

Este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, ya que estas deben estudiarse, aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Lo anterior se robustece en la Tesis de Jurisprudencia: 1a./J. 163/2005(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 2006, página 319), toda vez que, si de las constancias que obran en el expediente electrónico, se actualiza una causal de improcedencia establecidas en el artículo 191 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, dará lugar a que el presente Recurso de Revisión sea sobreseído.

En el presente caso, **no se actualiza ninguna de las causales de improcedencia** establecidas en el ordenamiento jurídico previamente señalado, toda vez que este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún medio de defensa presentado por la persona Recurrente ante otra instancia; no existió prevención alguna; la veracidad de la respuesta no formó parte del agravio; no se realizó una consulta o ampliación a los alcances del requerimiento informativo, aunado a que el medio de impugnación fue presentado en tiempo.

**Causales de sobreseimiento**

El artículo 192 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, señala las causales por las cuales se puede sobreseer en todo o en parte el Recurso de Revisión; así, del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se configuran las causales establecidas en las fracciones I, II, III, IV y V,toda vez que no hay constancias en el expediente en que se actúa, de que la persona Recurrente se haya desistido, fallecido, que el Sujeto Obligado hubiese modificado o revocado el acto impugnado o bien, que admitido una vez admitido el Recurso de Revisión, aparezca alguna causal de improcedencia o haya quedado sin materia.

## TERCERO. Determinación de la Controversia

La parte Solicitante, requirió la entrega de lo siguiente:

1. Los CFDI de los integrantes del cabildo y de los directores y coordinadores de la administración 2025-2027 de la primera quincena de enero.
2. Documento que acredité certificación para ocupar los puestos de Director que marca la Ley Orgánica Municipal.
3. Saber si la Síndico Municipal tiene un parentesco familiar con algún integrante de la administración.
4. *Curriculum vitae* del Coordinador de Reglamentos y vía pública.

En respuesta, el Sujeto Obligado a través del Encargado de despacho de Recursos Humanos indicó que se encontraba en trámite de acreditar las certificaciones y que desconocía la información de familiares de la Síndico Municipal. Derivado de la respuesta, la parte Recurrente se quejó por una respuesta incomprensible, por la entrega de información incompleta y emitió diversas manifestaciones subjetivas. Durante la sustanciación del Recurso de Revisión ambas partes fueron omisas en añadir elementos de análisis.

Así pues, de las constancias que integran el expediente, se advierte que en el asunto que nos ocupa se actualiza la causal de procedencia señalada en el artículo 179, fracción V, de la Ley de la materia; por la entrega de la información incompleta.

Establecido lo anterior, lo consecuente es analizar el agravio manifestado por el ahora Recurrente, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y demás disposiciones legales aplicables a la materia que se resuelve.

## CUARTO. Marco normativo aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública

El artículo 6°, Apartado A), fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público.

En materia local, el artículo 5°, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, es coincidente con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de la publicidad de toda la información, con la única restricción de proteger el interés público, así como la información referente a la intimidad de la vida privada y la imagen de las personas, con las excepciones que establezca la ley reglamentaria.

Por su parte, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios (Reglamentaria del artículo 5° de la Constitución Local), establece lo siguiente:

El artículo 12, que, quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma.

El artículo 18, que, los Sujetos Obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, considerando desde su origen la eventual publicidad y reutilización de la información que generen.

El artículo 19, que, se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados y en caso de que dichas facultades no se hayan ejercido, se deberá motivar la respuesta en función de las causas que motivaron tal circunstancia.

## QUINTO. Estudio de Fondo

Derivado de lo anterior, es preciso señalar que dentro de los motivos de inconformidad la parte Recurrente señaló lo siguiente:

*“…solo demuestra la falta de compromiso con la ciudadanía y las trabas que tiene el gobierno que a estas alturas esta aprendiendo. Fracasados”*

Dichos argumentos resultan manifestaciones subjetivas que corresponden a juicios de valor personales, que escapan del ejercicio de la materia que nos ocupa, por tanto, resultan improcedentes, en consecuencia, no serán analizados en el presente fallo, no se omite invitar a la parte Recurrente a ejercer sus derechos de forma pacífica y respetuosa.

Una vez expuesto lo anterior, también se advierte que la parte Recurrente se inconformó por la entrega de información incompleta, en virtud de lo anterior, se procede a analizar cada uno de los elementos que integran la solicitud de información en los siguientes términos:

* **Los CFDI de los integrantes del cabildo y de los directores y coordinadores de la administración 2025-2027 de la primera quincena de enero.**

Se debe de mencionar que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, establece en sus artículos 113, 114 y 117; que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento que será electo mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, asimismo, los ayuntamientos se integrarán con una jefa o jefe de asamblea que se denominará Presidenta o Presidente Municipal, respectivamente, y con varios miembros más llamados Síndicas o Síndicos y Regidoras o Regidores, cuyo número se determinará en razón directa de la población del municipio que representen.

Por su parte los artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, prevén que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado, asimismo indica que los Ayuntamientos se renovarán cada tres años y se integrarán por:

*“I. Un presidente, un síndico y cuatro regidores, electos por planilla según el principio de mayoría relativa, y tres regidores designados según el principio de representación proporcional, cuando se trate de municipios que tengan una población de menos 150 mil habitantes.*

*II. Un presidente, un síndico y cinco regidores, electos por planilla según el principio de mayoría relativa, y cuatro regidores designados según el principio de representación proporcional, cuando se trate de municipios que tengan una población de más de 150 mil habitantes y menos de 500 mil habitantes.*

*III. Un presidente, un síndico y siete regidores, electos por planilla según el principio de mayoría relativa; un síndico y cinco regidores designados según el principio de representación proporcional, cuando se trate de municipios que tengan una población de más de 500 mil habitantes*.”

Aunado a ello, el Bando Municipal aplicable al momento de la solicitud, es decir de 2024, señala en su artículo 40 y 42 que el gobierno municipal se deposita en un cuerpo colegiado denominado Ayuntamiento integrado por un Presidente Municipal, Síndico y Regidores, y que dicho ayuntamiento conocerá y decidirá respecto a las acciones del gobierno de la administración pública municipal en sesiones de cabildo, de los artículos antes citados se desprende **que si bien la persona Recurrente solicitó la entrega de la información de los miembros del cabildo, este corresponde a una reunión de los miembros del Ayuntamiento, que en todo caso representan al titular de la Presidencia Municipal, y de la Sindicatura y Regidurías.**

En este contexto, en la página oficial del Sujeto Obligado, en el apartado denominado “Conoce a tu Gobierno”, se identifica al Presidente Municipal, una Sindicatura y siete Regidurías; **los deberán ser entendidos como aquellos que forman parte del Cabildo y de los cuales requirió información la persona Solicitante**.

Una vez definido lo anterior, la persona Recurrente requirió la entrega de los CFDI de los integrantes del Ayuntamiento y de los Titulares de las Direcciones y Coordinaciones de la administración 2025-2027; al respecto el Bando Municipal 2025, establece en su artículo 56, las áreas administrativas que conforman la estructura orgánica del Ayuntamiento de San Martín de las Pirámides, en el que se advierten diversas Direcciones y Coordinaciones, **por lo que el Sujeto Obligado debe conocer de la información de sus titulares**.

Ahora bien, respecto a los documentos solicitados, es necesario traer a colación la Guía Técnica 9 “La Administración del Personal Municipal”, que establece que son servidores públicos, son todas aquellas personas que prestan su trabajo al servicio del municipio, conformado por las autoridades (Presidente Municipal, Síndico, Regidores, Comisarios, Delegados y Agentes Municipales), funcionarios (Secretario del Ayuntamiento, Directores, Tesoreros, Contralores y Jefes de Departamento) y empleados (puestos administrativos y técnicos).

En ese orden de ideas, el primer párrafo, del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que, en materia de responsabilidades, serán servidores públicos, los representantes de elección popular, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza dentro de la Administración Pública. De la misma manera, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, precisa que son servidores públicos a todas las personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión en los Municipios.

Además, el artículo 4°, fracción VI, de la Ley del Trabajo de los servidores públicos del Estado y Municipios, precisa que son **servidores públicos**, todas las personas físicas que presten a una institución pública un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un sueldo.

En orden de ideas, el artículo 3°, fracción XXXII, del Código Financiero del Estado de México y Municipios establece que la remuneración consiste en los pagos hechos por concepto de sueldo, compensaciones, gratificaciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones, en especie y cualquier otra percepción o prestación que se entregue al servidor por su trabajo.

Da la misma manera, el Anexo 4.5 Glosario de Términos, del Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio fiscal 2024, establece que la remuneración es la percepción de un trabajador o retribución monetaria que se da en pago por su servicio o actividad desarrollada.

En ese contexto, el artículo 92, fracción VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, establece que los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público de manera permanente y actualizada, las remuneraciones brutas y netas de todos los servidores públicos, que incluya todas las percepciones, entre las cuales, se encuentran los sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos, entre otros.

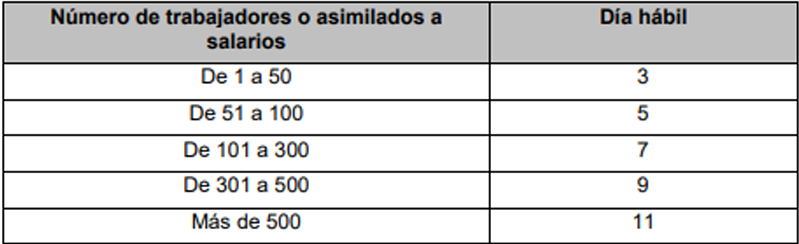
Ahora bien, respecto de los recibos de nómina, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en su artículo 220 K, fracciones II y IV, establece los documentos que tiene la obligación de conservar el Sujeto Obligado, entre los que se encuentra los **recibos de pago de salarios o las** **constancias documentales del pago de sueldos,** cuando sea por depósito o mediante información electrónica; así como los recibos o constancias de depósito o del medio de información magnética o electrónica que sean utilizadas para el pago de salarios, prima vacacional, aguinaldo y demás prestaciones.

Lo anterior, toma sustento en la Tesis aislada número I.6o.T.154 L (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada el abril de dos mil dieciséis, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en su Libro 29, Tomo III, misma que señala lo siguiente:

***“RECIBOS DE PAGO******EMITIDOS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS SIN FIRMA DEL TRABAJADOR. SON VÁLIDOS PARA ACREDITAR LOS CONCEPTOS Y MONTOS QUE EN ELLOS SE INSERTAN (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ARTÍCULO 776, FRACCIONES II Y VIII, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, A LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO).*** *En materia burocrática los recibos de pago que se obtienen por medios electrónicos son válidos para acreditar los conceptos y montos que en ellos se insertan, en términos del artículo 776, fracciones II y VIII, de la Ley Federal del Trabajo, aplicada supletoriamente a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; lo anterior por no ser contrarios a la moral ni al derecho, por lo que la falta de firma de esos documentos, no les resta convicción plena, porque el avance de la ciencia y la necesidad propia de evitar pagos en efectivo, han impuesto al patrón-Estado pagar a sus trabajadores por la vía electrónica; por tanto, si para demostrar las percepciones y montos los recibos correspondientes se exhiben de esta forma sin prueba en contrario que los desvirtúe, entonces no hay razón jurídica para condicionar su eficacia probatoria a que deban adminicularse con otras pruebas; resolver en contrario, implicaría desatender el artículo 137 de la referida Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.”*

De la tesis transcrita, se desprende que **en materia burocrática** **los recibos de pago acreditan los conceptos y montos que en ellos se insertan**, y constituyen prueba para demostrar las percepciones y montos que reciben los servidores públicos.

Además, la Resolución Miscelánea Fiscal del ejercicio fiscal dos mil veinticinco, y la página oficial del Servicio de Administración Tributaria, precisa que un Comprobante Fiscal Digital por Internet por concepto de nómina y otras retenciones, es también conocido como Recibo de Nómina, mismo que se podrá expedir antes de la realización de los pagos correspondientes o dentro del plazo señalado en función al número de sus trabajadores, posteriores a la realización efectiva de dichos pagos, conforme a lo siguiente:



Asimismo, precisa que se considerará como fecha de expedición y entrega de tales comprobantes fiscales la fecha en que efectivamente se realizó el pago de dichas remuneraciones.

Además, el Anexo 4.2 Clasificador por Objeto del Gasto Estatal y Municipal 2024, del Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio fiscal 2024 establece que los Presupuestos de Egresos Municipales, se tendrán que generar, conforme al “Clasificador por Objeto del Gasto”, el cual se conforma de diversos capítulos, entre los cuales, se encuentra el **1000 Servicios Personales**, **que agrupa las remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, tales como el sueldo, salarios, dietas, honorarios, prestaciones, aguinaldo, obligaciones laborales, entre otras**

En ese contexto, los LINEAMIENTOS, FECHAS DE CAPACITACIÓN Y CALENDARIZACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES ESTATALES Y MUNICIPALES DEL EJERCICIO FISCAL 2025, DE LAS ENTIDADES FISCALIZABLES DEL ESTADO DE MÉXICO emitidos por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, el cual precisa que los Ayuntamientos deben de proporcionar, para su fiscalización, diversos documentos, entre los cuales se encuentran aquellos del **Módulo 4**, que contienen la **Conciliación de Nómina y el Comprobante Bancario de Dispersión de Nómina y/o cheques,** el cual se conforma de del listado de servidores públicos, con todas sus percepciones y deducciones, mismo que se genera de manera quincenal.

Ahora bien, dichos Lineamientos, también prevén que se deben de proporcionar en el **Módulo 1,** las Conciliaciones Bancarias, cuya finalidad es emitir información de los movimientos bancarios realizados a detalle, los cuales se hayan realizado en cierto periodo de tiempo, por lo que, se deberán remitir los estados de cuenta bancarios y de inversión digitalizados en todas y cada una de las páginas.

Ahora bien, el Bando Municipal del Sujeto Obligado vigente al momento de la solicitud establece en sus artículos 96, que la Tesorería Municipal es la unidad administrativa responsable de realizar las erogaciones y funciones que instruya el Ayuntamiento, así como de la administración de la Hacienda Pública Municipal, por lo que, **resulta ser una de las áreas competentes para conocer de los CFDI que den cuenta del pago de salarios a favor de personas servidoras públicas del Sujeto Obligado.**

En este contexto normativo, es menester analizar que, en la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, se omitió algún pronunciamiento relacionado con los CFDI, por lo tanto, la respuesta no fue exhaustiva en ese sentido al no existir pronunciamiento respecto de este sirve por analogía, el Criterio 2/17, emitido por el entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, señala lo siguiente:

***“Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la información.*** *De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que* ***la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados****. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y* ***atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de información.”***

Del citado criterio de orientación, se desprende que todo acto administrativo debe apegarse al **principio de congruencia y exhaustividad**, entendiendo por estos que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos requeridos, lo cual en materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que, las respuestas que emitan los sujetos obligados, así como las resoluciones de los Organismos de Transparencia Estatales, deben guardar una relación lógica con lo solicitado, analizando y decidiendo –de manera íntegra- sobre todos los puntos requeridos, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. En consecuencia, **el Sujeto Obligado no colmó el punto de análisis, puesto que no se pronunció al respecto.**

Cabe destacar que de las actuaciones que obran en el expediente digital en el SAIMEX no se aprecia que se haya turnado la solicitud de información al área de la Tesorería Municipal, por tanto, se aprecia que no se hizo la búsqueda de la información; en este tenor, es necesario hacer referencia al procedimiento de búsqueda que deben de seguir los Sujetos Obligados para localizar la información, el cual se encuentra previsto en los artículos 160 y 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, mismo que es el siguiente:

1. Las Unidades de Transparencia garantizarán que las solicitudes de acceso a la información se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla -de acuerdo con las facultades, competencias y funciones-, con el objeto de que dichas áreas realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información requerida, y
2. Los sujetos obligados otorgarán acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes.

En atención a lo antes expuesto, resulta dable considerar que el Sujeto Obligado no se pronunció en respuesta y no hizo la búsqueda exhaustiva y razonable de la información, por tanto, deberá realizarla y entregar la documentación solicitada. No se omite mencionar que la documentación puede tener datos personales confidenciales, por lo que deberá entregarla en versión pública, para lo cual, se deberá proporcionar el Acuerdo de Clasificación donde el Comité de Transparencia, confirme la eliminación de los datos confidenciales de acuerdo con los artículos 49, fracciones II y VIII, 132, fracción II, 143, fracción I y 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Documento que acredité certificación para ocupar los puestos de Director que marca la Ley Orgánica Municipal.**

Al respecto es menester precisar que el artículo 47 fracción VIII de la Ley del trabajo de los servidores públicos del Estado y Municipios, establece que para ingresar al servicio público se requiere de cumplir con los requisitos que se establezcan para los diferentes puestos; por lo que para acceder a los puestos de titulares de las diversas Direcciones que integran la estructura **orgánica del Sujeto Obligado, se debe cumplir con los requisitos necesarios.**

Aunado a ello, los LINEAMIENTOS, FECHAS DE CAPACITACIÓN Y CALENDARIZACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES ESTATALES Y MUNICIPALES DEL EJERCICIO FISCAL 2025, DE LAS ENTIDADES FISCALIZABLES DEL ESTADO DE MÉXICO, emitidos por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, el cual precisa que los Ayuntamientos deben de proporcionar, para su fiscalización, diversos documentos, entre los cuales se encuentran aquellos del **Módulo 4**, que corresponden a “certificación de competencia laboral de servidores públicos” en los que se debe entregar los certificados que avalen el contenido del formato y señala que será responsabilidad del secretario del ayuntamiento, darlos a conocer trimestralmente a los integrantes del Ayuntamiento,  **por lo que se advierte que el Sujeto Obligado debe conocer de la información solicitada.**

Sumado a lo anterior, el artículo 194 del Bando Municipal aplicable al momento de la solicitud, prevé que la Dirección de Recursos Humanos es la dependencia encargada de llevar un control del personal adscrito a la administración pública municipal y de realizar el proceso de contratación y asignación del personal seleccionado para ocupar algún puesto de las diferentes áreas de la administración,  **por lo que se advierte que el Sujeto Obligado a través de la Dirección de Recursos Humanos puede conocer de la información solicitada.**

Ahora bien, cabe resaltar que la persona Recurrente requiere las certificaciones conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica, por lo que, se atrae al estudio lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en el que se advierte cuáles son las Unidades Administrativas que deben contar con ciertos requisitos para ocupar diversos cargos, entre ellos, tal como se detalla a continuación:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Artículo** | **Cargo** | **Certificación** | **Obligatorio** |
| **Artículo 81 Bis** | Titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil | Se requiere, además de los requisitos del artículo 32 de esta Ley, tener los conocimientos suficientes debidamente acreditados en materia de protección civil para poder desempeñar el cargo y **acreditar dentro de los seis meses siguientes a partir del momento en que ocupe el cargo**, a  a través del certificado respectivo, haber tomado cursos de capacitación en la materia, impartidos por la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo o por cualquier otra institución debidamente reconocida por la misma. | Certificado, tiene 6 meses para acreditarlo. |
| **Artículo 85 Sexies** | Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria | Acreditar, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que inicie sus funciones el diplomado en materia de mejora regulatoria expedido por el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Estado de México o la certificación de competencia laboral expedida por el Instituto Hacendario del Estado de México o por alguna otra institución con reconocimiento de validez oficial. | Opcional la certificación o un diplomado, tiene 6 meses para acreditarlo. |
| **Artículo 92** | Secretario del Ayuntamiento | Contar con la certificación de competencia laboral en la materia, expedida por el Instituto Hacendario del Estado de México o por alguna otra institución con reconocimiento de validez oficial, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que inicie funciones. | Sí, tiene 6 meses para acreditarlo. |
| **Artículo 96** | Tesorero Municipal | Certificación de competencia laboral expedida por el Instituto Hacendario del Estado de México o por alguna institución con reconocimiento de validez oficial, deberá acreditarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que inicie funciones. | Sí, tiene 6 meses para acreditarlo. |
| **Artículo 96 Ter** | Director de Obras Públicas o Titular de la Unidad Administrativa equivalente | Deberá acreditar, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que inicie funciones, la certificación de competencia laboral expedida por el Instituto Hacendario del Estado de México o por alguna otra institución con reconocimiento de validez oficial. | Sí, tiene 6 meses para acreditarlo. |
| **Artículo 96 Quintus** | El Director de Desarrollo Económico o Titular de la Unidad Administrativa equivalente | Deberá acreditar, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que inicie funciones, la certificación de competencia laboral expedida por el Instituto Hacendario del Estado de México o por alguna otra institución con reconocimiento de validez oficial. | Sí, tiene 6 meses para acreditarlo |
| **Artículo 96 Septies** | El Director de Desarrollo Urbano o el Titular de la Unidad Administrativa equivalente | Deberá acreditar, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que inicie funciones, la certificación de competencia laboral expedida por el Instituto Hacendario del Estado de México o por alguna otra institución con reconocimiento de validez oficial. | Sí, tiene 6 meses para acreditarlo |
| **Artículo 96 Nonies** | El Director de Ecología o el Titular de la Unidad Administrativa equivalente | Deberá acreditar, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que inicie funciones, la certificación de competencia laboral expedida por el Instituto Hacendario del Estado de México o por alguna otra institución con reconocimiento de validez oficial. | Sí, tiene 6 meses para acreditarlo |
| **Artículo 96. Undecies** | El Director de Turismo | Requiere contar con título profesional en el área de turismo o afín. | No |
| **Artículo 96 Terdecies** | El Director de Desarrollo Social o el Titular de la Unidad Administrativa equivalente | Requiere contar con título profesional en el área de Ciencias Sociales o a fin, o contar con una experiencia mínima de un año en la materia, con anterioridad a la fecha de su designación. | No |
| **Artículo 96 Quindecies** | Titular de la Dirección de las Mujeres | Deberá acreditar, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que inicie funciones, la certificación de competencia laboral en temas de prevención, atención integral y erradicación de la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, en igualdad sustantiva o materias afines, expedida por el Instituto Hacendario del Estado de México o por alguna otra institución con reconocimiento de validez oficial. | Sí, tiene 6 meses para acreditarlo |
| **Artículo 113.** | Contralor | Certificación de competencia laboral expedida por el Instituto Hacendario del Estado de México o por alguna institución con reconocimiento de validez oficial, deberá acreditarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que inicie funciones. | Sí, tiene 6 meses para acreditarlo |
| **Artículo 123 Bis.** | La persona titular de los organismos públicos descentralizados en materia de cultura física y deporte | Preferentemente deberá contar con título profesional en el área de educación física o disciplina afín. | No |
| **Artículo 124 Quáter** | Titular de la Unidad Municipal de Control y Bienestar Animal | Contar con Licenciatura y Cédula en Medicina Veterinaria, Zootecnista o profesión que se relacione con el conocimiento del cuidado y manejo de animales. | No |
| **Artículo 147 I** | Defensor Municipal de Derechos Humanos | Certificación en materia de derechos humanos, que para tal efecto emita la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. | Sí |
| **Artículo 147 Q** | Cronista Municipal | Contar preferentemente con título de Licenciado en Historia o disciplina a fin. | No |

En atención a lo anterior, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, señala de manera precisa que puestos dentro de la administración pública municipal son lo que deben cumplir con la certificación en materia de competencia laboral en la materia del cargo que se desempeñará, expedida por institución con reconocimiento de validez oficial, requisito que **deberá acreditarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que inicien sus funciones**.

En este contexto normativo, se debe analizar que en respuesta, el encargado del despacho de Recursos Humanos, que corresponde al área competente informó que se encuentra en proceso de acreditar las certificaciones, en virtud de encontrarse dentro del periodo de seis meses; lo cual, concuerda con lo expuesto en líneas anteriores, en este sentido, este Organismo Garante no cuenta con facultades para pronunciarse sobre la veracidad de lo manifestado por el Sujeto Obligado, **en consecuencia se tiene por colmado por cuanto hace a los titulares que cuentan con un plazo de seis meses para acreditar su certificación**.

Cabe señalar que de la normatividad en cita se desprende que la persona titular de **la Defensoría Municipal de Derechos Humanos debe contar con certificación y no se precisa una temporalidad para acreditarlo,** por tanto, se advierte que su titular debe contar con dicha certificación al momento de ingresar en el cargo; en este sentido, se advierte que en el Bando Municipal vigente al momento de la solicitud, prevé en su artículo 65 que cuenta con una Defensoría Municipal de los Derechos Humanos, de igual forma, el Bando Municipal vigente al momento en el que se emite la presente, prevé en su artículo 68, fracción I y 69 la existencia de dicha Defensoría, en consecuencia, el Sujeto Obligado deberá realizar la búsqueda de la información y **entregar el documento que dé cuenta de la certificación correspondiente**.

En este sentido vale la pena precisar que el artículo 117, fracciones II, III y IV, del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, señala que son atribuciones del Instituto de Investigaciones y Formación en Derechos Humanos, de la CODHEM los faculta para certificar en materia de derechos humanos, pero no establece una temporalidad para la emisión de la certificación. De igual forma se localizó la a convocatoria Para el curso autogestivo y proceso de certificación en materia de Derechos Humanos dirigida a defensoras municipales, y en el que se señala que para obtener la certificación se debe tener un curso que estaría disponible a partir del 15 de enero del año en curso y que para obtener la certificación se debe obtener una calificación de 8, además se debe pagar una inscripción de 3,800 pesos; en este tenor, existe la posibilidad de que a la fecha de la solicitud, la persona titular de la defensoría municipal de derechos humanos, no contara o bien, estuviera en trámite para obtener dicha certificación.

En este sentido, si bien en respuesta refirió que las personas servidoras públicas contaban con seis meses para obtener la certificación y que estaba en dicho periodo, para el caso de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos, la Ley no otorga dicho plazo, por tanto, no es posible tener por atendida la solicitud de información con la respuesta, en consecuencia, el Sujeto Obligado deberá buscar la información y entregar el documento que de cuenta de la certificación.

No se omite mencionar, que debido al procedimiento de certificación y que depende de las convocatorias de la CODHEM, se deberá considerar la posibilidad de que, a la fecha de la solicitud no tenga la certificación y, en consecuencia, bastara que el Sujeto Obligado lo haga del conocimiento del Particular de manera precisa y clara.

* **Saber si la Síndico Municipal tiene un parentesco familiar con algún integrante de la administración.**

Ahora bien, respecto a que la persona titular de la Sindicatura cuente con algún familiar integrante de la administración, cabe señalar que lo solicitado corresponde a un cuestionamiento cuya respuesta requiere de un pronunciamiento específico, lo cual no constituye una solicitud de información, al respecto, se debe tener en consideración que el derecho de acceso a la información pública se satisface en aquellos casos en que se entregue la documentación en el que conste la información solicitada, sin necesidad de elaborar documentos *ad hoc*; lo cual, toma sustento en el artículo 160 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el cual refiere que los Sujetos Obligados deberán entregar la información que obre en sus archivos.

Además, resulta atraer al estudio el Criterio orientador 03/17 como fuente del derecho emitido por el entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: “***No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información”***en el que se precisa que de conformidad con los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Sujetos Obligados deben dar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos y que estén obligados a documentar conforme a sus facultades o funciones, de acuerdo a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre; de forma tal, que los Sujetos Obligados garantizan el derecho de acceso a la información al proporcionar la información que obre en sus archivos, sin que ello implique que deban generar documentos nuevos.

Por ello, los Sujetos Obligados únicamente se encuentran obligados a proporcionar los documentos que den cuenta de la información solicitada, como obren en sus archivos, sin tener que elaborarlos a las necesidades de la parte Recurrente.

Así pues, los cuestionamientos que fueron formulados en los que se requiere que en respuesta el Sujeto Obligado genere un razonamiento, una investigación, un cálculo o un documento nuevo que no obre en sus archivos, estos tienen otra naturaleza y pueden tratarse de una consulta que implique el ejercicio de un derecho de petición y no de acceso a la información pública.

En ese tenor, por lo que respecta a la definición del derecho de petición se tiene que el Doctor Ignacio Burgoa Orihuela refiere que *“es un Derecho Público subjetivo individual de la Garantía Respectiva Consagrada en el artículo 8 de la Ley Fundamental. En tal virtud, la persona tiene la facultad de acudir a cualquier autoridad, formulando una solicitud o instancia escrito de cualquier índole, la cual adopta, específicamente, el carácter de simple petición administrativa, acción o recurso, etc.”.*

Por otra parte, el derecho de acceso a la información pública es aquel, en el que, los particulares pueden solicitar información referente a aquellos documentos que, en ejercicio de sus atribuciones, reflejen la toma de decisiones de los Sujetos Obligados o de aquellos que por cualquier motivo reciban, administren o apliquen recursos públicos, y está previsto en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En consecuencia, aquellos cuestionamientos cuya respuesta se traduzca en obtener un documento nuevo en el que se pretenda obtener una respuesta en la que se expresen razonamientos, motivos, investigaciones o generar documentos nuevos no pertenecen al derecho de acceso a la información sino al derecho de petición, ya que de ellos derivan cuestionamientos, cuya única respuesta implica que se procese la información y se emita un pronunciamiento específico; por lo que, en su caso, no será dable ordenar la entrega de dicha documentación. Por lo tanto, lo solicitado corresponde a un derecho de petición pues el Recurrente requiere que el Sujeto Obligado realice un pronunciamiento concreto respecto a los vínculos familiares de la Síndico Municipal.

En este tenor, el Sujeto Obligado a través de respuesta indicó que desconoce lo solicitado, en virtud de no contar con información relacionada con los familiares de la servidora pública, por tanto, al tratarse de una consulta y que en un ejercicio de máxima publicidad fue contestada por el Sujeto Obligado, se tiene por colmado el punto en cuestión.

No se omite mencionar que se dejan a salvo los derechos de la parte Recurrente para solicitar ante la Secretaría de la Contraloría la manifestación de intereses, la cual de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de responsabilidades administrativas del Estado de México y Municipios tiene lugar para declarar algún conflicto de intereses en diversos supuestos, entre ellos, respecto a familiares consanguíneos, sin embargo, cabe precisar que dicha información no es competencia del Sujeto Obligado que nos ocupa, sino de la Secretaría de la Contraloría.

* ***Curriculum vitae* del Coordinador de Reglamentos y vía pública.**

Ahora bien, respecto a la información curricular de la persona servidora pública, se debe tener en consideración que el *Currículum Vitae*, es aquel documento que las personas elaboran con los datos de identificación y contacto, preparación académica y experiencia profesional, para presentarse ante un posible empleador. Por lo que, dicho documento da cuenta de la preparación académica y la experiencia laboral, lo cual permite identificar el nivel de conocimientos de su titular, así como, su perfil profesional o laboral.

En ese sentido, si bien el currículum, se trata de aquel elaborado por cada persona, sin ninguna validez oficial, también lo es, que tiene por objetivo que las personas puedan conocer la trayectoria de quién lo presenta; por lo que, existe un interés público para dar a conocer dicha información, pues transparenta que el personal que labora para el Sujeto Obligado cuenta con las capacidades, conocimientos y experiencia necesaria para cumplir con sus funciones.

Lo anterior, se robustece con la fracción XXI, del artículo 92 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que establece que la **información curricular** es información que deben de poner a disposición del público los sujetos obligados.

En ese contexto, según Islas, Jorge (2016), en la “Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Comentada” (p. 244), refirió que el **currículum vitae** d**e un servidor público, justifica que su formación académica resulta viable para el desempeño eficiente y correcto de su encargo; lo anterior, con el fin de acreditar que dichos trabajadores sean los más capacitados acordes al área solicitada.**

En el mismo sentido, el Criterio de Interpretación, de la Tercera de Época, con número de registro SO/007/2023, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, establece que una de las formas en que los ciudadanos pueden evaluar las aptitudes para desempeñar un cargo público determinado, es mediante la **publicidad de ciertos datos contenidos en el** currículum vitae*,* tales como, **la trayectoria académica, profesional, laboral, así como todos aquellos que acrediten su capacidad, habilidades pericia para ocupar el puesto público.** Lo anterior, para favorecer la rendición de cuentas, pues la publicidad de lo anterior tiene como fin verificar el correcto desempeño de los sujetos obligados.

Ahora bien, el artículo 98, fracción XVII de la Ley del trabajo de los servidores públicos del Estado y Municipios, establece que son obligaciones de las instituciones públicas integrar los expedientes de los servidores públicos.

Por su parte, el artículo 194 del Bando Municipal del Sujeto Obligado aplicable al momento de la solicitud, prevé que la Dirección de Recursos Humanos es la dependencia encargada de llevar un control del personal adscrito a la administración pública municipal, **por tanto, es el área competente para conocer de lo solicitado.**

En este contexto el Encargado de Despacho de Recursos Humanos, en su carácter de área competente, entregó en respuesta un documento denominado síntesis curricular, que da cuenta de lo solicitado y ante lo cual, este Organismo Garante no cuenta con facultades para pronunciarse respecto su veracidad, en consecuencia, se **tiene por atendido el punto de análisis.**

Por todo lo antes expuesto, es dable tener por parcialmente fundados los motivos de inconformidad y, por tanto, **MODIFICAR** la respuesta inicial y ordenar la entrega de lo faltante en los términos antes expuestos.

**Versión Pública**

Establecido lo anterior, cabe mencionar que el artículo 6°, Apartado A), fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

Igualmente, el segundo párrafo del artículo 16 de dicho ordenamiento, dispone que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos; así como, a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

De la misma manera, el artículo 5°, fracciones I y II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, prevé que toda la información en posesión de los Sujetos Obligados será pública; no obstante, aquella referente a la intimidad de la vida privada y la imagen de las personas, será protegida a través de un marco jurídico rígido, de tratamiento y manejo de datos personales.

Por su parte, el artículo 24, fracción VI, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, precisa que los Sujetos Obligados serán los responsables de proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial.

En concordancia con lo previó, el artículo 143, fracción I, de la Ley previamente citada, establece que la información privada y los datos personales, concernientes a una persona física o jurídica colectiva identificada o identificable son confidenciales.

Asimismo, el artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, prevé que para que los Sujetos Obligados puedan permitir el acceso a la información confidencial, requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información, excepto cuando I) la información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público, II) por ley tenga el carácter de pública, III) exista una orden judicial, IV) por razones de seguridad nacional y salubridad general o V) para proteger los derechos de terceros o cuando se transmitan entre sujetos obligados en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales.

En términos de lo expuesto, la documentación y aquellos datos que se consideren confidenciales, serán una limitante del derecho de acceso a la información, siempre y cuando:

1. Se trate de datos personales o información privada; esto es, información concerniente a una persona física o jurídica colectiva y que esta sea identificada o identificable.
2. Para la difusión de los datos, se requiere el consentimiento del titular.

En ese orden de ideas, de conformidad con el artículo 3°, fracción IX, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, con relación el diverso 4°, fracciones XI y XII, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, se advierte que son datos personales, la información concerniente a una persona física o jurídico colectiva identificada o identificable (cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier documento informativo físico o electrónico), establecida en cualquier formato o modalidad.

Además, en el artículo 5° de dicho ordenamiento jurídico, establece que es la Ley aplicable para todo tratamiento de datos personales.

En ese orden de ideas, los artículos 6°, 7°, 8° y 14 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios disponen que los responsables del tratamiento de datos personales, deben observar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad; además, que dicho tratamiento deberá obedecer exclusivamente a sus atribuciones legales y con el consentimiento de su titular, además de que debe estar justificado en ley (principio de finalidad).

En este sentido, un dato personal es cualquier información que pueda hacer a una persona física o jurídica colectiva identificada e identificable. Asimismo, la doctrina desarrollada a nivel internacional, respecto del tema de datos personales, establece que también las preferencias, gustos, cualidades, opiniones y creencias, constituyen datos personales. En este sentido, cualquier información que por sí sola o relacionada con otra permita hacer identificable a una persona, es un dato personal, susceptible de ser clasificado.

Por lo cual, la confidencialidad de los datos personales tiene por objetivo establecer el límite del derecho de acceso a la información a partir del derecho a la intimidad y la vida privada de los individuos. Sobre el particular, el legislador realizó un análisis en donde se ponderaban dos derechos: el derecho a la intimidad y la protección de los datos personales versus el interés público de conocer el ejercicio de atribuciones y de recursos públicos de las instituciones y es a partir de ahí, en donde las instituciones públicas deben determinar la publicidad de su información.

De tal suerte, las instituciones públicas tienen la doble responsabilidad, por un lado, de proteger los datos personales y por otro, darles publicidad cuando la relevancia de esos datos sea de interés público.

En este orden de ideas, toda la información que transparente la gestión pública, favorezca la rendición de cuentas y contribuya a la democratización del Estado Mexicano es, sin excepción, de naturaleza pública; tal es el caso de los salarios de todos los servidores públicos, la entrega de recursos públicos bajo cualquier esquema, el cumplimiento de requisitos legales, cumplimiento de atribuciones, entre otros; información que necesariamente está vinculada con datos personales, que pierden la protección en beneficio del interés público (no por eso dejan de ser datos personales, sólo que no están protegidos en la confidencialidad).

Dada la complejidad de la información cuando involucra datos personales, pudiera pensarse que se trata de dos derechos en colisión; por un lado, la garantía individual de conocer sobre el ejercicio de atribuciones de servidores públicos así como de recursos públicos y, por el otro, el derecho de las personas a la autodeterminación informativa y el derecho a la vida privada; tratándose de los datos personales que obran en los archivos de las instituciones públicas, la regla es clara, ya que los datos personales que permiten verificar el desempeño de los servidores públicos y el cumplimiento de obligaciones legales, transparentan la gestión pública y favorecen la rendición de cuentas, constituyen información de naturaleza pública, en razón de que el beneficio de su publicidad es mayor que el beneficio de su clasificación, aun tratándose de información personal.

Ahora bien, cuando las personas tienen una relación comercial, laboral, de servicios, trámites o del tipo que sea, necesariamente por un tema de interés público, debe cederse un poco de privacidad, de tal forma que la gente en general pueda verificar el debido desempeño de los servidores públicos, la aplicación de la ley y el ejercicio de recursos públicos; sin embargo, esto obliga a un ejercicio de ponderación en donde únicamente se privilegie la publicidad de los datos esenciales para la transparencia y rendición de cuentas, sin afectar la vida privada de las personas.

Bajo ese contexto, se analizarán de manera enunciativa más no limitativa algunos datos personales que pueden encontrarse dentro de los documentos que pueden dar cuenta de lo requerido por el Particular y que actualiza el supuesto de información confidencial por corresponder a la vida privada de las personas son CURP, RFC, cuentas bancarias, número de seguridad social, entre otros, los cuales actualizan la causal de clasificación establecida en el artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Además, el Sujeto Obligado deberá seguir el procedimiento establecido en el artículo 168 de dicho ordenamiento jurídico; esto es, que el área competente deberá elaborar la versión pública en los términos planteados en la presente Resolución, así como emitir el Acuerdo, por parte del Comité de Transparencia, donde confirme la clasificación de los datos previamente señalados, fundando y motivando la clasificación.

## SEXTO. Decisión

Con fundamento en el artículo 186, fracción III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, este Instituto considera procedente **MODIFICAR** la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado a la solicitud de información **00005/MARTIPIR/IP/2025**, por resultar parcialmente fundadas las razones o motivos de inconformidad hechos valer por la parte Recurrente, en el Recurso de Revisión **02771/INFOEM/IP/RR/2025**, en consecuencia procede **ORDENAR,** la entrega de la información faltante en los términos expuestos.

**Términos de la Resolución para la parte Recurrente:**

Se hace del conocimiento de parte Recurrente que este Organismo Garante determinó concederle parcialmente la razón, puesto que el Sujeto Obligado no entregó la totalidad de la información solicitada; por lo que ordena la entrega de la documentación faltante.

Es necesario mencionar que para el caso de que la información tenga datos personales será necesaria su entrega en versión pública, lo que significa que se testan los datos personales y se entrega acompañada de un acuerdo en el que se expresen las razones por las que se protegen dichos datos.

Se dejan a salvo sus derechos para que, en su caso requiriera ante la Secretaría de la Contraloría documentos relacionados con las declaraciones de intereses de la Síndico Municipal, mediante una nueva solicitud de información.

La labor del INFOEM, es apoyar a la población para acceder a la información pública y garantizar la protección de sus datos personales.

# R E S U E L V E

**PRIMERO.** Se **MODIFICA** la respuesta entregada por el **Ayuntamiento de San Martín de las Pirámides** a la solicitud de información **00005/MARTIPIR/IP/2025** por resultar fundadas las razones o motivos de inconformidad hechos valer por la Recurrente en el Recurso de Revisión **02771/INFOEM/IP/RR/2025**, en términos de los considerandos QUINTO y SEXTO de la presente Resolución.

**SEGUNDO.** Se **ORDENA** al Sujeto Obligado, a efecto de entregue, previa búsqueda exhaustiva y razonable, a través del SAIMEX, en su caso, en versión pública, los documentos que den cuenta de lo siguiente:

1. Los CFDI de los integrantes del Ayuntamiento y de las personas titulares de las Direcciones y Coordinaciones de la administración 2025-2027 de la primera quincena de enero de 2025.
2. Documento que acredite la certificación de la persona titular de la Defensoría Municipal de Derechos Humanos, que ocupaba el cargo al 17 de enero de 2025.

Para la entrega de la información, de ser necesarias las versiones públicas, se deberá proporcionar el Acuerdo de Clasificación donde el Comité de Transparencia, confirme la eliminación de los datos confidenciales, de conformidad con los artículos 49, fracciones II y VIII, 132, fracción II, 143, fracción I y 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

En caso de no contar con la certificación que se ordena entregar en el punto 2, en términos del Considerando QUINTO, bastará con que lo haga del conocimiento del Particular de manera precisa y clara.

**TERCERO. NOTIFÍQUESE POR SAIMEX** la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, para que conforme al artículo 186, último párrafo, 189, segundo párrafo, y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente y, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III, 214, 215 y 216 de la Ley referida.

De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el Sujeto Obligado de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

**CUARTO. NOTIFÍQUESE** **POR SAIMEX** a la parte Recurrente la presente Resolución, asimismo, se hace de su conocimiento que de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios podrá promover el Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables.

ASÍ LO RESUELVE, POR **UNANIMIDAD** DE VOTOS EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS, MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA, SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ, LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA, EN LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO, ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.